



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1328

20 de Abril de 2018

EMPRESAS DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO

BOLETÍN 11273-03

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1328

20 DE ABRIL DE 2018

ÍNDICE

EMPRESAS DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO

BOLETÍN 11273-03

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	6
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	7
COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICOS.....	10
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	13
ANEXO	18

EMPRESAS DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11273-03

REFERENCIA	Regula la creación y funcionamiento de las empresas de beneficio e interés colectivo
INICIATIVA	Moción de los diputados Sra. Fernández y Sr. Kast (Felipe)
ORIGEN	Cámara de Diputados
COMISIÓN	De Economía, Fomento y Desarrollo
INGRESO	13 de junio de 2017
ARTICULADO	Doce artículos permanentes y un transitorio; los artículos permanentes se dividen en los siguientes cinco títulos: Título I) Disposiciones generales (arts. 1° a 3°); Título II) De la Sociedad y su Constitución (art. 4°); Título III) De los Estatutos, Administración y Obligaciones de la Sociedad (arts.5° a 9°); Título IV) Pérdida de la Calidad de Empresa de Beneficio e Interés Colectivo (arts. 10 y 11); Título V) Modificaciones a leyes especiales (art.12)

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

La moción originalmente presentada venía a regular las sociedades comerciales o industriales de “beneficio e interés colectivo (BIC)”. La iniciativa buscaba hacerse cargo de proveer un marco regulatorio a un fenómeno creciente en los últimos años en Chile y el mundo, consistente en la creación de empresas que dedican su actividad profesional a solucionar un problema de la sociedad o el medio ambiente o empresas híbridas que buscan rentabilidad conjuntamente con actividades sociales. En el mundo, estas empresas han generado asociaciones y movimientos, los que surgen en Estados Unidos y luego se extienden a la Unión Europea y a otras jurisdicciones, incluido Chile, en que las empresas que lo integran se auto-regulan y tienen la posibilidad de certificarse, en general con entidades certificadoras privadas, como “Empresas B”. Ello a la luz del cumplimiento voluntario de ciertos estándares autoimpuestos, debiendo cumplir con la normativa del caso en las jurisdicciones en que existe regulación al efecto (ciertos estados de Estados Unidos por ejemplo). La certificación es un proceso de evaluación voluntario y periódico y no constituye un requisito para ser Empresa B, pero está disponible como mecanismo de validación y transparencia de sus buenas prácticas. Se trata de iniciativas o emprendimientos en general pequeños y medianos, que se encaminan a agregar valor en las comunidades en que se desenvuelven.

La idea de otorgar un reconocimiento jurídico oficial a este tipo de empresas radica en que en la actualidad pudiera ser controvertido que el interés social o societario, tal y como lo recoge nuestra legislación, admita este tipo de figuras jurídicas. Ello porque buena parte de la doctrina sostiene que nuestra legislación recoge la teoría contractualista del interés social, en que el gobierno corporativo de una sociedad debe maximizar el valor para los accionistas o dueños del capital, para lo cual debe asegurar que las compañías sean administradas en el mejor interés de éstos y se asume, comúnmente, que el mejor interés implica maximizar el valor de su inversión. Sin embargo, una concepción más amplia del “Gobierno Corporativo” conocida como la teoría de los *stakeholders*, abarca un espectro más amplio de incumbentes y relaciones. De acuerdo a esta teoría, en vez de que la administración deba gestionar la compañía, exclusivamente, en el mejor interés de los accionistas, aquella debiera intentar, asimismo, equilibrar el interés de todos los *stakeholders*. En los últimos años, más que intentar hacer competir una y otra noción, algunos autores, como W. Norman¹, han señalado que los *stakeholders* hoy deben ser considerados como una prioridad. Así se trataría de una manera de percibir a la compañía que enfatiza cuán integrada o ligada está con un conjunto de relaciones y actores.

Ahora bien, resulta discutible que al proveer de este marco de certeza jurídica se deriven otras consecuencias. En este sentido, y aun cuando la propuesta no busca expresamente conceder a

1 Norman, W. (2013): “Stakeholder Theory”, in H. LaFollette (ed.), International Encyclopedia of Ethics, Wiley-Blackwell.

dichas empresas beneficio tributario alguno (mal podría hacerlo siendo ésta una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo), el reconocimiento legal de sus objetivos de impacto social pudiera colaborar en evitar que se rechacen gastos destinados a alcanzar alguna de las finalidades descritas en su objeto social. Sin embargo, como decíamos, el tratamiento tributario es un tema que no se deduce del reconocimiento de las Empresas B en la legislación y, de otorgarse, debiera cumplir con las exigencias constitucionales (iniciativa exclusiva presidencial).

Preciso es recordar además que existen también otros vehículos disponibles en nuestra legislación para materializar iniciativas del tipo, como lo son las actuales fundaciones o corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, que también pueden ser creadas e impulsadas por algunas empresas. La diferencia es que la sociedad BIC es una empresa en sí misma que admite como parte de su objeto fines diversos.

Por su parte, menester es reconocer también que cada día más, las empresas en general han comenzado a contemplar modelos que incorporan la sostenibilidad como parte de su modelo de negocios, elevando el estándar en sus estructuras de gobernanza y gestión, e incluyendo el concepto como parte de su quehacer y giro, todo lo cual resulta muy positivo.

En suma y más allá de la búsqueda de certeza jurídica, el proyecto de ley no logra, en lo formal, el propósito que buscaban los autores de la moción, desde que sus preceptos no resultan suficientes como para comprender exactamente la naturaleza y administración de estas empresas BIC, y no logra explicar el valor agregado de la regulación. Por su parte, durante la tramitación de la moción en la Comisión de Economía, Fomento y Turismo de la Cámara de Diputados, si bien se aprobó por unanimidad la idea de legislar, posteriormente, en la votación particular, se rechazaron prácticamente todos sus artículos, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que pretendían entre otras crear un registro (lo que a nuestro juicio resultaba innecesario, aumentando la burocracia estatal y los costos de transacción para estas empresas, en general, PYMES) menos el primero y un transitorio sobre la vigencia, con lo cual la iniciativa quedó trunca y con serios problemas de armonización y coherencia.

A pesar de ello, este informe versa sobre el proyecto inicialmente presentado, al cual se agrega, en un anexo, el texto del proyecto contenido en el informe, de fecha 26 de enero de 2018, de la antedicha Comisión al cual también nos referiremos.

Finalmente, al regular sobre esta materia, es preciso tener en consideración que la regulación no debiera ser excesiva ni menos orientada a burocratizar la creación de estas empresas, pues en general se trata de empresas de menor tamaño y de un fenómeno en evolución, como se expresó en la discusión de la comisión. Una regulación debiera tener por objeto nada más que proveer de un marco legal que les dé certeza para operar ■■■

CONTENIDO DEL **PROYECTO DE LEY**

La moción originalmente presentada define a la empresa de beneficio e interés colectivo o empresa B.I.C., como una organización societaria regida por su respectiva ley (responsabilidad limitada, anónima, etcétera), cuyos socios aportan bienes y se comprometen a producir un impacto positivo o reducir un efecto negativo en la comunidad.

La calidad BIC se adquiere mediante la suscripción de sus estatutos sociales o mediante la modificación de los estatutos de la sociedad “matriz”. La empresa “matriz” o “preexistente” puede perder, por ciertas causales, su calidad BIC y continuar con su giro social según sus estatutos.


El proyecto regula los elementos mínimos de sus estatutos, los que deben estar disponibles al público.

Es nulo todo acuerdo que limite la finalidad de la empresa BIC, esto es, alcanzar impactos positivos o reducir los negativos para la comunidad.

Los miembros del órgano de administración de la sociedad BIC están afectos a responsabilidad solidaria por el resultado de su gestión.

Una vez al año se debe presentar un informe de sostenibilidad de carácter público (por ejemplo, en la página web) que dé cuenta de los medios y medidas destinadas al cumplimiento del objeto social.

Se prevén dos causales de pérdida de la calidad de sociedad BIC: la decisión voluntaria de los socios mediante modificación de los estatutos, y la decisión de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo, mediante resolución fundada, por incumplimiento de sus obligaciones. Esta resolución puede recurrirse conforme a la ley sobre procedimiento administrativo.

Con las modificaciones introducidas por la Comisión de Economía, Fomento y Turismo de la Cámara de Diputados, el proyecto quedó reducido a un artículo que, por sí solo, resulta insuficiente para que las empresas BIC puedan operar legalmente. Por lo tanto, se requeriría ampliar sus disposiciones en los términos indispensables para que el proyecto, si fuera aprobado como ley, pudiera resultar aplicable, requiriendo, en ese caso, que el Presidente de la República hiciera uso de su potestad reglamentaria de ejecución 

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

Según puede desprenderse de la redacción primitiva del proyecto (sumadas las indicaciones presentadas en el primer trámite en la Cámara de Diputados por la Administración anterior), la empresa BIC es una sociedad comercial, constituida según la ley común, que además de sus fines comerciales, tiene por objeto generar un impacto positivo en las personas y el medioambiente, pudiendo destinar recursos para ello, los que se deducen de las utilidades las que, por lo tanto, se reducen para los socios o accionistas.

La idea de otorgar un reconocimiento jurídico oficial a este tipo de empresas radica en que en la actualidad pudiera ser controvertido que el interés social o societario, tal y como lo recoge nuestra legislación, admita este tipo de figuras jurídicas. Ello porque buena parte de la doctrina sostiene que nuestra legislación recoge la teoría contractualista del interés social, en el que el gobierno corporativo de una sociedad debe maximizar el valor para los accionistas o dueños del capital, para lo cual debe asegurar que las compañías sean administradas en el mejor interés de éstos y se asume, comúnmente, que el mejor interés implica maximizar el valor de su inversión. Así, la administración (el agente) llevará a cabo sus deberes y labores con el objetivo de proteger el interés de los mandantes, esto es, de los accionistas. Quienes adhieren a esta forma de concebir el gobierno corporativo lo hacen aduciendo razones de causalidad y otros de objetivos o finalidad. Los primeros indican que la prevalencia de los accionistas se explica sobre la base de la promesa que les hace a éstos la administración de gestionar la firma en el mejor interés de ellos. Los segundos, sustentan su apoyo a esta doctrina

señalando que administrar las compañías en el mejor interés de los accionistas es más eficiente que hacerlo de cualquier otra manera², ya que si a la administración no se le da un único objetivo, que sea claro y medible -maximizar el valor para los accionistas- tendrían entonces una oportunidad para lo que se conoce como actos en el propio interés³.

Sin embargo, una concepción más amplia del “Gobierno Corporativo” conocida como la teoría de los stakeholders, abarca un espectro más amplio de incumbentes y relaciones. Esta teoría fue planteada por Freeman en la década de los ochenta, y luego re editada por el mismo Freeman en años posteriores⁴. De acuerdo a esta teoría, en vez de que la administración deba gestionar la compañía, exclusivamente, en el mejor interés de los accionistas, aquélla debiera intentar, asimismo, equilibrar el interés de todos los stakeholders. En algunas versiones de esta concepción más amplia, tales stakeholders o terceros estarían integrados o reconocidos en la definición tradicional, sobre la base de acuerdos contractuales o legales con la compañía, aun cuando permanecerían en un rol secundario o postergado de cara a los intereses de los accionistas. La teoría de los stakeholders ha

2 Hansmann, H. and Kraakman, R. (2001): “*The End of History for Corporate Law*”, Georgetown Law Journal, 89: 439–68.

3 Lynn A. Stout, (2002); “*Bad and Not-So-Bad Arguments for Shareholder Primacy*”, 75 S. Cal. L. Rev. 1189.

4 Freeman, R. E., Wicks, A. C. & Parmar, B. (2004): “*Stakeholder theory and the corporate objective revisited*”, Organization Science, 15: 364-69. <http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1040.0066>, y Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & de Colle, S. (2010): *Stakeholder theory: The state of the art*, Cambridge: Cambridge University Press.

sido criticada desde distintas dimensiones. Desde su articulación, se ha cuestionado el alcance del concepto stakeholders⁵. Los grupos comúnmente identificados serían los accionistas, empleados, la comunidad, proveedores y clientes. Pero otros grupos también podrían tener interés en la compañía, tales como acreedores, las autoridades y la competencia, y lo cierto es que existe una gran diferencia en dónde se traza la línea, sin que se haya provisto una argumentación racional lo suficientemente sólida para explicar donde se dibujaría.

En los últimos años, como señalábamos, más que intentar hacer competir una y otra noción, algunos autores, como W. Norman⁶, han señalado que los stakeholders hoy deben ser considerados como una prioridad. Así se trataría de una manera de percibir a la compañía que enfatiza cuán integrada o ligada está con un conjunto de relaciones y actores.

Si bien las dos visiones sobre el gobierno corporativo pueden intentar explicar por qué ha sido más o menos complejo integrar el concepto de sostenibilidad empresarial (que de alguna manera resume en buena parte los objetivos de las Empresas B), en las culturas de las compañías, no resuelven la mayoría de los dilemas. No obstante ello, autores como el profesor Luigi Zingales de la Escuela de Chicago, en su estudio denominado “El Valor de la Cultura Corporativa”, ha señalado que el buen gobierno corporativo que incorpora la sostenibilidad empresarial, en su dimensión de integridad corporativa entendida ésta como un valor que se vive en el quehacer de las

compañías, mostraban en el largo plazo utilidades más altas y mejores resultados, en general, en otros indicadores económicos. En este sentido, constituiría un driver para la maximización del valor para los accionistas en el largo plazo, pues conduce a mejorar las relaciones y a construir confianzas entre los colaboradores y la alta administración, con la autoridad y tiende puentes hacia nuevas oportunidades de negocios.

De esta manera, y en el marco de esta discusión y reconociendo que pudiera resultar insuficiente para algunos la autonomía de la voluntad de los contratantes, como una explicación razonable para pactar este tipo de sociedades -toda vez que nuestra legislación reconocería más bien la teoría contractualista en la creación de las sociedades comerciales y bajo ese concepto entiende el rol del gobierno corporativo como ya hemos detallado- puede resultar aceptable una regulación concreta respecto de estas empresas. Ello para generar mayor certeza jurídica respecto de lo que se espera de sus órganos de administración y la responsabilidad de éstos, que se obligan a cumplir los objetivos que las caracterizan como Empresas B en relación con sus inversionistas, sus trabajadores, los consumidores y la comunidad, con mejores prácticas de gobierno corporativo.

Por su parte, al darse lectura al proyecto no es posible abstenerse de pensar en las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, esto es, las fundaciones y corporaciones, que tienen fines de beneficencia pública o de carácter altruista, a que se refiere el Título XXXIII del Libro I Código Civil, modificado por el artículo 38 de la ley 20.500 de 16 de febrero de 2011. Es así que la finalidad de lograr un impacto positivo o la reducción de algún efecto negativo en la comunidad o en el medio ambiente, bien podría formar parte de los estatutos de una corporación de derecho privado, ahora también denominadas asociaciones. La diferencia

5 Orts, E.W. & Strudler, A. J (2009): Business Ethics 88 (Suppl 4): 605. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0310-y>.

6 Norman, W. (2013): “Stakeholder Theory”, in H. LaFollette (ed.), International Encyclopedia of Ethics, Wiley-Blackwell.

esencial es que la entidad BIC requiere para su existencia del sustento jurídico y financiero de una sociedad, cualquiera sea su estructura legal y su objeto, mientras que una asociación constituida según el citado Título XXXIII es una entidad sin fines de lucro. Sin perjuicio de que una persona jurídica, como otra fundación o una empresa, pueda integrar una asociación de derecho privado, si se lo permiten sus propios estatutos y, especialmente, con el objeto de proporcionar financiamiento).

Se trata, en efecto, de una institución jurídica nacida y utilizada en diversos otros países como una forma de dotar a las sociedades comerciales e industriales, de una herramienta de apoyo a la comunidad o ámbito social donde la sociedad tenga su sede y desarrolle sus actividades; de esta forma se logran dos propósitos relacionados entre sí: por un lado se beneficia a la comunidad mediante actividades de beneficio o de mitigación de efectos negativos, o por otro, se mejora y potencia la imagen corporativa de la compañía. Es una fórmula nueva en nuestro medio, que no obstante, y como decíamos, puede tener una figura equivalente en los casos en que una empresa, generalmente de mayor tamaño, constituye separadamente una fundación para desarrollar diversas actividades de bien público, de ayuda a la comunidad, de protección al medio ambiente, etcétera, o bien, puede encontrar el desarrollo dentro de la misma empresa bajo el concepto de sostenibilidad empresarial que las empresas tradicionales han desarrollado e incorporado en su gestión y gobernanza. La sociedad BIC permite unificar y administrar conjuntamente “ambos giros

sociales”, el propiamente económico o industrial y el de beneficio colectivo.

Otra diferencia, más bien leve, se derivaría del hecho que la corporación o fundación está hoy día sujeta a un sistema de registro para su constitución, de suerte tal que es en la municipalidad donde ahora se depositan los estatutos, y se otorga un plazo al secretario municipal para formular observaciones; anteriormente, como se recordará, se requería una autorización del Ministerio de Justicia para tener existencia legal.

Una última reflexión de carácter general. La antigua forma de constitución de las corporaciones y fundaciones, como se recordará, significaba un importante grado de desconfianza del poder central del Estado respecto de la actividad de beneficencia desarrollada por privados. Debía ser autorizada por decreto luego de riguroso examen de los estatutos y demás antecedentes, con informe de diversos órganos públicos, incluido el Consejo de Defensa del Estado; esa desconfianza era más evidente al comprobar que una sociedad comercial no requería autorización de ninguna clase; bastaba constituirse, registrarse en el Registro de Comercio y hacer iniciación de actividades.

La actual normativa de la citada ley 20.500 hace justicia a las intenciones altruistas de los particulares y solo les exige registro, pero no es necesario pedir autorización, sin perjuicio del plazo de 30 días que tiene el secretario municipal para formular objeciones, lo que es un mecanismo mínimo y suficiente de control para evitar posibles situaciones irregulares ■■■

V. COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO

A continuación resumimos nuestros comentarios a los principales artículos de la moción originalmente presentada:

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
<p>Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a las Empresas de Beneficio e Interés colectivo sin perjuicio de que además estas sociedades se sometan a las leyes que regulan su respectivo tipo societario.</p> <p>Con todo, las disposiciones de esta ley primarán por sobre las específicas de cada sociedad.</p>	<p><i>En este artículo queda claramente establecido que las normas que regulan a la sociedad BIC, según su respectiva naturaleza jurídica, permiten el giro adicional del beneficio e interés común.</i></p> <p><i>Es importante anotar que las normas legales específicas de la sociedad BIC priman sobre las que rigen a la sociedad propiamente comercial o industrial. No obstante, la norma es necesaria desde el momento que, si no se estableciera un principio de precedencia, se podrían generar problemas de interpretación al coexistir ambas sociedades y ambos regímenes legales.</i></p>
<p>Artículo 4°.- Constitución. Se podrá adquirir la calidad de Empresa de Beneficio e Interés colectivo ya sea mediante su constitución conforme a las disposiciones de la presente ley o mediante la reforma de sus estatutos y el cumplimiento de las demás formalidades establecidas en la presente ley.</p>	<p><i>Este artículo vuelve a clarificar que no se trataría de dos sociedades sino de una sola con dos giros, y propone dos formas de constitución: una, mediante un estatuto originario de acuerdo a esta ley, y la otra, mediante reforma de los estatutos de la sociedad matriz.</i></p>
<p>Artículo 7°.- Modificación de los Estatutos. Cualquier modificación a los Estatutos, que pudiese tener un impacto sobre las disposiciones de los Estatutos relacionadas con su calidad de Empresa de Beneficio e Interés Colectivo, deberá ser comunicado a sus socios y ser información de acceso público.</p>	<p><i>La redacción de este artículo debe mejorarse toda vez que la modificación de estatutos, en general para el tipo de empresas de que estamos hablando, se acuerda entre los mismos socios de manera que la comunicación de los cambios persigue más bien fines de transparencia de cara a la comunidad (sin perjuicio que pueda también perseguir la comunicación a los socios).</i></p>

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
<p>Artículo 8°.- Administración de las Empresas de Beneficio e Interés colectivo. La administración de las Empresas de Beneficio e Interés colectivo, deberá en el ejercicio de sus cargos, respetar, proteger y considerar los intereses de la sociedad y buscar cumplir con el impacto positivo o la reducción de algún efecto negativo en la comunidad y el medio ambiente.</p> <p>Es nula toda estipulación del Estatuto social y todo acuerdo del órgano de la administración que tienda a limitar o liberar de la obligación de respetar, proteger y considerar los intereses de la sociedad y buscar cumplir con el impacto positivo o la reducción de algún efecto negativo en la comunidad y el medio ambiente.</p>	<p><i>Este artículo busca plasmar la obligación de la administración de dar íntegro cumplimiento al objeto social, incluyendo los fines específicos que caracterizan a las Empresas BIC.</i></p>
<p>El órgano de administración deberá emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que las personas emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente.</p>	<p><i>Esta norma resulta innecesaria a la luz de la regulación de la responsabilidad de los administradores u órganos de administración de las sociedades en general, normas que como vimos son aplicables.</i></p>
<p>Artículo 10°.- Pérdida Calidad de Empresa de Beneficio e Interés Colectivo. Las Empresas de Beneficio e Interés Colectivo perderán dicha calidad en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Por decisión voluntaria de sus miembros a través de la modificación de sus estatutos, según lo establecido en el artículo 8. Si se determina por parte de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo mediante resolución fundada que la Empresa de Beneficio e Interés Colectivo no ha dado cumplimiento a las obligaciones y requisitos que esta ley establece. <p>En contra de la resolución procederán los recursos dispuestos en la ley N°19.880 sobre Actos Administrativos.</p>	<p><i>No parece razonable que el Ministerio de Economía pueda gatillar la pérdida de la calidad de la Empresa BIC si en principio no ha certificado en su origen que así lo sea. El Registro de Sociedades que lleva actualmente el ministerio, y bajo el cual deben cumplirse determinadas formalidades para la constitución y modificación de sociedades, no es un registro que certifique determinadas circunstancias más allá de las formalidades del caso al momento de su constitución o modificación.</i></p> <p><i>Por su parte, son varios los recursos posibles en el contexto de la ley de Procedimientos Administrativos, por lo que habría sido preferible una norma más precisa.</i></p>

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
<p>Artículo 11°.- Efectos pérdida de calidad. En caso que la pérdida de reconocimiento se produzca por las causas establecidas en las letras b) del artículo precedente, la Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo deberá oficiar al Registro de Comercio y al registro establecido en el Título III⁷ de la Ley 20.659⁸, si correspondiere, para efectos de que se anote marginalmente dicha circunstancia en la inscripción respectiva de la persona jurídica. Con todo, la pérdida del reconocimiento de la calidad de Empresa de Beneficio e Interés Colectivo no produce la disolución de la sociedad o asociación.</p> <p><small>7 Debería referirse al Título IV: TÍTULO IV Del Registro de Empresas y Sociedades Artículo 11.- Este Registro de Empresas y Sociedades deberá constar en un sitio electrónico, al que deberán incorporarse las personas jurídicas que se acojan a esta ley para los efectos de ser constituidas, modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas, disueltas o migradas. Este Registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público, gratuito y deberá estar permanentemente actualizado a disposición de quien lo consulte en el sitio electrónico, de manera que asegure la fiel y oportuna publicidad de la información incorporada en él. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará encargado de su administración y de que dicho Registro cumpla las normas de la presente ley y de su Reglamento.</small></p> <p><small>8 Ley que SIMPLIFICA EL RÉGIMEN DE CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.</small></p>	<p><i>Este artículo confunde los efectos jurídicos de una situación jurídica, con las instancias administrativas a que ella puede dar lugar. Por ejemplo, el matrimonio produce efectos entre los cónyuges de carácter económico, sociedad conyugal u otra forma de administración, efectos hereditarios, patria potestad, etcétera; cosa distinta es que el matrimonio se inscriba en un registro público.</i></p> <p><i>El artículo 11 llama efectos de la pérdida de la calidad de empresa BIC a la cancelación de la inscripción; pero no aclara qué efectos, jurídicamente, deberían producirse, por ejemplo, la liquidación de la sociedad y en qué términos.</i></p>

VI. **TEXTO DEL** PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°.- Objeto de esta ley. La presente ley tiene por objeto regular la creación y funcionamiento de empresas denominadas “Empresas de Beneficio e Interés colectivo” que son aquellas que persiguen un beneficio e interés colectivo.

Para efectos de esta ley, entiéndase por “beneficio e interés colectivo” el impacto positivo o la reducción de algún efecto negativo en la comunidad y el medio ambiente. Este impacto deberá ser revelado públicamente mediante las formas dispuestas en la presente ley.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a las Empresas de Beneficio e Interés colectivo sin perjuicio de que además estas sociedades se sometan a las leyes que regulan su respectivo tipo societario.

Con todo, las disposiciones de esta ley primarán por sobre las específicas de cada sociedad.

Artículo 3°.- Empresas de Beneficio e Interés colectivo. La Empresa de Beneficio e Interés colectivo es una persona jurídica formada por un fondo común suministrado por sus socios quienes son responsables sólo por sus respectivos aportes, sociedad que se constituye o acoge a las disposiciones de la presente ley y que incluye en su objeto social de sus Estatutos el impacto positivo o la reducción de algún efecto negativo en la comunidad y el medio ambiente.

El nombre de estas sociedades, además de incluir el nombre correspondiente según su tipo social, podrá incluir a continuación las palabras “de Beneficio e Interés colectivo” o las siglas “B.I.C.”.

TÍTULO II

De la Sociedad y su Constitución

Artículo 4°.- Constitución. Se podrá adquirir la calidad de Empresa de Beneficio e Interés colectivo ya sea mediante su constitución conforme a las disposiciones de la presente ley o mediante la reforma de sus estatutos y el cumplimiento de las demás formalidades establecidas en la presente ley.

TÍTULO III

De los Estatutos, administración y obligaciones de la Sociedad

Artículo 5°.- Estatutos. Los Estatutos de las Empresas de Beneficio e Interés colectivo deberán expresar:

- a) El nombre y domicilio de la sociedad;
- b) La enunciación la o las finalidades, compromisos, objetivos, obligaciones y principios para alcanzar el impacto positivo o la reducción de algún efecto negativo en la comunidad y el medio ambiente;
- c) La obligación de quienes conforman la sociedad de que en el ejercicio de sus funciones velarán por el cumplimiento de dichos objetivos;
- d) La manera en que se dará cuenta al resto de los miembros de la sociedad el monitoreo y evaluación del impacto de la empresa.

Artículo 6°.- Publicidad de los Estatutos. Los Estatutos deberán estar a disposición permanente del público y el acceso a su contenido debe ser gratuito.

Artículo 7°.- Modificación de los Estatutos. Cualquier modificación a los Estatutos, que pudiere tener un impacto sobre las disposiciones de los Estatutos relacionadas con su calidad de Empresa de Beneficio e Interés Colectivo, deberá ser comunicado a sus socios y ser información de acceso público.

Artículo 8°.- Administración de las Empresas de Beneficio e Interés colectivo. La administración de las Empresas de Beneficio e Interés colectivo, deberá en el ejercicio de sus cargos, respetar, proteger y considerar los intereses de la sociedad y buscar cumplir con el impacto positivo o la reducción de algún efecto negativo en la comunidad y el medio ambiente.

Es nula toda estipulación del Estatuto social y todo acuerdo del órgano de la administración que tienda a limitar o liberar de la obligación de respetar, proteger y considerar los intereses de la sociedad y buscar cumplir con el impacto positivo o la reducción de algún efecto negativo en la comunidad y el medio ambiente.

El órgano de administración deberá emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que las personas emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente.

Artículo 9°.- Informe anual de sostenibilidad. Las Empresas de Beneficio e Interés colectivo deberán presentar una vez al año un reporte de sostenibilidad que dé cuenta de los medios y esfuerzo que ha puesto para buscar el cumplimiento de sus objetivos sociales y medioambientales y que deberá estar disponible en su página web o en algún medio de acceso público y gratuito.

El informe deberá contener:

- a) La manera en que ha dado cumplimiento al objetivo social manifestado en sus Estatutos.
- b) Sus políticas de sostenibilidad y otras declaraciones de compromiso con la comunidad, y como éstas se reflejan en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios para inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa.
- c) Los principales resultados, riesgos y contingencias en relación con temas sociales y de medio ambiente.

TÍTULO V⁹

Pérdida calidad de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo

Artículo 10°.- Pérdida Calidad de Empresa de Beneficio e Interés Colectivo. Las Empresas de Beneficio e Interés Colectivo perderán dicha calidad en los siguientes casos:

- a) Por decisión voluntaria de sus miembros a través de la modificación de sus estatutos, según lo establecido en el artículo 8.
- b) Si se determina por parte de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo mediante resolución fundada que la Empresa de Beneficio e Interés Colectivo no ha dado cumplimiento a las obligaciones y requisitos que esta ley establece.

En contra de la resolución procederán los recursos dispuestos en la ley N°19.880 sobre Actos Administrativos.

Artículo 11°.- Efectos pérdida de calidad. En caso que la pérdida de reconocimiento se produzca por las causas establecidas en las letras b) del artículo precedente, la Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo deberá oficiar al Registro de Comercio y al registro establecido en el Título III¹⁰ de la Ley 20.659¹¹, si correspondiere, para efectos de que se anote marginalmente dicha circunstancia en la inscripción respectiva de la persona jurídica.

Con todo, la pérdida del reconocimiento de la calidad de Empresa de Beneficio e Interés Colectivo no produce la disolución de la sociedad o asociación.

9 Corresponde al Título IV.

10 Debería referirse al Título IV:

TÍTULO IV Del Registro de Empresas y Sociedades

Artículo 11.- Este Registro de Empresas y Sociedades deberá constar en un sitio electrónico, al que deberán incorporarse las personas jurídicas que se acojan a esta ley para los efectos de ser constituidas, modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas, disueltas o migradas.

Este Registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público, gratuito y deberá estar permanentemente actualizado a disposición de quien lo consulte en el sitio electrónico, de manera que asegure la fiel y oportuna publicidad de la información incorporada en él.

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará encargado de su administración y de que dicho Registro cumpla las normas de la presente ley y de su Reglamento.

11 Ley que SIMPLIFICA EL RÉGIMEN DE CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.

TÍTULO VI¹²

Modificaciones a leyes especiales

Artículo 12°.- Agréguese en el artículo 42 número 1 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas después del punto y coma la siguiente oración:

“o se trate de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo”¹³.

TÍTULO VII

Disposiciones Transitorias

Artículo primero transitorio. Esta ley entrará en vigencia 60 días después de publicada en el Diario Oficial.

12 Corresponde al Título V.

13 El N°1 quedaría con la siguiente redacción:

Art. 42. Los directores no [de una sociedad anónima] podrán:

1) Proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social; o se trate de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo;

ANEXO

Texto del proyecto de ley según el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Turismo de fecha 26 de enero de 2018:

Como se dijo anteriormente, más allá de la moción originalmente presentada y de las indicaciones del Ejecutivo -que fueron en su gran mayoría rechazadas por la Comisión en comento-, el texto que finalmente aprobó la Comisión y que se transcribe a continuación solo deja a salvo dos artículos del proyecto, haciendo referencia a otros que no fueron aprobados por la Comisión, quedando así en una iniciativa aprobada que por cierto no resulta suficiente para que sea aprobado como ley, técnica legislativa y proyecto que, en consecuencia, debieran ser objeto de corrección en los trámites que restan.

“Artículo 1°.- Objeto de esta ley. La presente ley regula la inscripción, vigencia y permanencia de las personas jurídicas enumeradas en el artículo siguiente que estén inscritas en el Registro Nacional de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo establecido en el artículo 12.

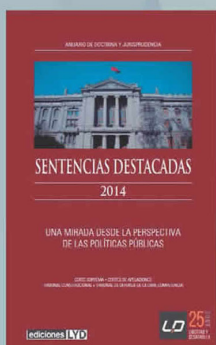
Para efectos de esta ley, entiéndase por “beneficio e interés colectivo”, la gobernanza transparente y el impacto positivo que deriva de la prevención y mitigación de efectos negativos y la promoción de acciones a favor de la comunidad, los trabajadores, la cadena de valor o el medio ambiente. Este impacto deberá ser divulgado públicamente mediante las formas dispuestas en la presente ley. Asimismo, entiéndase por empresa de beneficio e interés colectivo, aquella persona jurídica que ostenta dicha calidad por encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo, de conformidad al título III de la presente ley.”

Artículo transitorio.- Esta ley entrará en vigencia 60 días después de publicada en el Diario Oficial.



ÚLTIMAS PUBLICACIONES

VENTA ONLINE EN WWW.LYD.ORG



Sentencias Destacadas
2014 (2015),
Varios autores

"El paciente se pone
impaciente" (2014)
Mikel Uriarte P.

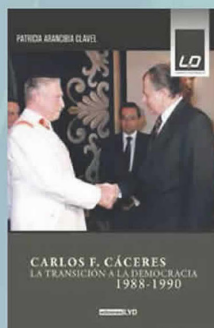


Migraciones en Chile:
Oportunidad Ignorada
(2014) Álvaro Bellolio A.,
Hernán Felipe
Errázuriz C.

Sentencias Destacadas
2013 (2014),
Varios autores



Pensiones:
Propuestas para el
Futuro (2015)
Varios autores



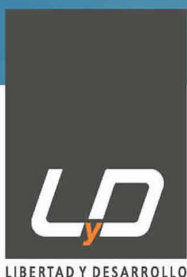
La transición a la
democracia 1988-1990.
(2014)
Carlos F. Cáceres.

Activismo judicial en Chile
¿Hacia el gobierno de los
jueces? (2013)
José Francisco García y
Santiago Verdugo



LYD ES
REPRESENTANTE
EXCLUSIVO EN CHILE
DE LIBROS UNIÓN
EDITORIAL DE ESPAÑA.

**NO SE PIERDA
ADEMÁS LAS
NOVEDADES EN
EL CATÁLOGO DE
LIBROS DE UNIÓN
EDITORIAL.**



LIBERTAD Y DESARROLLO
ALCÁNTARA 498, LAS CONDES
SANTIAGO DE CHILE

www.lyd.org / lyd@lyd.org

